*Frentes Electricistas***Endurecimiento de las Líneas**

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

DE modo cada vez más claro, acontecimientos internos en la industria eléctrica van mostrando cómo se desenvuelven procesos políticos nacionales más complicados, en los que aquéllos se inscriben y a los cuales compendian y resumen.

La renuncia de Jorge Tamayo López Portillo a la subdirección de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro sobreviene en momentos en que dos frentes de conflicto están abiertos: Por una parte, la disputa entre la tendencia democrática y la dirección "charra" del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Y, de otro lado, el emplazamiento a huelga formulado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). No se trata de situaciones desvinculadas entre sí, sino de elementos de un mismo proceso.

En vista de la ineficacia de las vías legales y gremiales, la tendencia democrática del SUTERM está recurriendo a la presión política para conseguir sus objetivos, que se resumen en instaurar la democracia en su sindicato y en hacer de éste un partícipe activo en la gestión de la industria eléctrica nacionalizada. Para lograr tal propósito, el galvanismo ha reunido a su alrededor a una vasta porción de gremios y grupos, heterogéneos en varios sentidos, pero a quienes mueve la idea de ampliar las vías de participación sindical y política de los ciudadanos de este país. Con tales efectivos, la tendencia democrática ha probado su carácter masivo y la trascendencia de sus fines.

Un nuevo episodio en esta lucha se efectuará el próximo sábado, en que otra vez se congregarán en calles céntricas de la ciudad de México los miembros y los simpatizantes de la corriente democrática. Entrando en el terreno indicado por ésta, pero con claro afán provocativo, la dirección "charra" del SUTERM, como lo ha hecho otras veces, intenta disuadir a los manifestantes de salir a la calle, con una escasamente velada amenaza de violencia. No sería la primera vez que la empleara, como por otra parte ha utilizado otras armas ilegítimas. Tal ha sido, por ejemplo, el incidente de hace una semana en Puebla, en que se produjo un sabotaje que, en sospechosa manobra, fue imputado a la tendencia democrática. En esta operación desprestigiante, el liderazgo "charro" del S.U.T.E.R.M. ha contado, en apariencia, con el apoyo de la CFE.

POR otro lado, el SME se dispone a revisar el contrato colectivo que lo vincula con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El SME ha sido un gremio enérgico, democrático, nacionalista. Sus dirigentes han sido obligados, so pena de desplazamiento, a permanecer vinculados con su base. Encabezados ahora por Jorge Torres Ordóñez, que recientemente pasó la prueba de la reelección, los miembros del SME actuarían dentro de su propia lógica si plantearan demandas que acrecienten sus satisfacciones económicas y su grado de participación en la industria eléctrica.

Esta vez, sin embargo el objeto de la lucha entablada por sus dirigentes no se limita a lo meramente sindical. Las peticiones que ahora se formulan son desproporcionadas no tal vez a las necesidades y apetencias de los trabajadores, pero sí a la dimensión de las recientemente planteadas por el sindicato. Ha habido también desproporción en el modo de presentar el pliego petitorio, haciendo

Disidencia Delincuente

Democracia Prisionera

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

HAY una clara, temible relación entre el descomunal despliegue policiaco en medio del cual se realizó el sábado anterior la manifestación del sindicalismo independiente, y la sentencia en segunda instancia contra 36 personas que fueron aprehendidas en 1968 a raíz de los conflictos sociales de aquel año y que ahora estaban en libertad bajo protesta.

Por efecto de la decisión judicial, esas personas están en riesgo de ser reaprehendidas. Muchas de ellas, persuadidas de la necesidad de una lucha política popular e independiente, han continuado tareas en tal sentido no obstante la agresión estatal que las puso en prisión durante varios años. La sentencia dictada ahora por su contenido y el modo sorpresivo en que ha sido comunicada tiene inequívocamente el carácter de un acto de represión política.

También lo tuvo la amplitud del aparato policiaco puesto en marcha el sábado 20 por la tarde. Es preciso borrar, primero la torcida impresión que se ha querido dejar en el ánimo público: no fue la presencia policiaca, sino la sensatez política de los manifestantes del Monumento a la Revolución, lo que preservó el orden. Y luego, identificar las intenciones gubernamentales expresadas en el colosal mecanismo de vigilancia hecho operar en las calles capitales en esa fecha.

Con rubor mínimo, la "Alianza Popular Revolucionaria", que no es otra cosa que el PRI mismo, pretendió que la reunión oficialista del propio sábado, en el Zócalo, se proponía rendir homenaje a Benito Juárez. Pero la verdadera intención se transparentaba: se trató de inhibir mediante la escasamente solapada amenaza de violencia, la marcha del sindicalismo independiente. Tan clara fue la insolencia priísta que ante la insistencia de los disidentes de marchar hacia el Zócalo, cuando éste hubiese sido desocupado, se inventó una romería nocturna, de tal modo que la Plaza de la Constitución no pudiera quedar disponible tras del mitin vespertino.

COMO si en el monumento a la Revolución se hubiesen reunido peligrosos delincuentes, y a pesar del anuncio público en que se desistía de la marcha al Zócalo ante la provocación priísta, la policía tendió un cerco en torno de la Plaza de la República. Que no se trataba de un mero arbitrio de vigilancia lo evidenciaron la ferocidad que en el rostro y en sus expresiones verbales ponían los jefes policiacos, ostensiblemente prejuiciados contra los sindicalistas independientes.

La amenaza policiaca del sábado se ha concretado en una acción judicial el lunes. La lección que quiere transmitirse con estas actitudes es patente: la disidencia política es un delito, y el que se atreva a practicarla sabe a qué atenerse. En primera instancia basta el amago de los garrotes, las granadas lacrimógenas, los tanques antimotines, los halcones con mal disimulo infiltrados entre la multitud. En segunda instancia, allí está la cárcel para quien no se someta.

La prepotencia, o el miedo, o la reunión de ambas enfermizas actitudes están en la base de este comportamiento gubernamental. La satanización de la crítica, o su desprecio público, puestos de nuevo en práctica con insistencia, se suman a aquellos preocupantes indicadores.

Es hora de saber, con hechos si el gobierno estima imposible dar cuenta de su capacidad para negociar políticamente con sus opositores políticos. Si sólo puede enfrentarlos con gendarmes y con jueces, si no puede encararlos con inteligencia, y sólo con la fuerza, el desdén o la calumnia, sabremos que los signos de apertura apuntados hace cinco años agotaron ya su contenido.